

la Autora, tras unas interesantes referencias al debate doctrinal sobre la coordinación de los intereses de índole cultural y religioso, expone el contenido del Acuerdo de revisión del Concordato lateranense de 1984 relativo a la materia. Lo cierto es que el artículo 12, tras una declaración de colaboración, en el respectivo orden, de la Santa Sede y la República italiana, realiza una remisión a futuras disposiciones concordadas para la regulación de la materia. Esa previsión tiene, evidentemente, el acierto de no sustraer del ámbito de la bilateralidad la regulación del patrimonio histórico y artístico de las entidades eclesiásticas, pero, por otra parte, el hecho de que no se hayan elaborado esos acuerdos «subconcordatarios» sigue privando al ordenamiento italiano de una norma orgánica y, además, hace que la norma básica siga siendo la vieja Ley de 1939.

Sí se han suscrito algunos acuerdos de ámbito regional (que la Autora analiza sintéticamente) y local, pero ni por su contenido ni por su alcance pueden colmar la laguna a la que se acaba de hacer referencia.

JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ
GARCÍA-PEÑUELA

RICHARD PUZA-ABRAHAM PETER KUSTERMAN (eds.), *Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entwicklungen der «Synodalität» in der katholischen Kirche*, Universitätsverlag Freiburg Schweiz 1996, 1 vol. de 103 pp.

Los cuatro trabajos que se publican en este pequeño libro corresponden al Simposio celebrado en 1993 en Stutt-

gart, organizado por la Academia de la diócesis en colaboración con el Departamento de Derecho Canónico de la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Tubinga.

El motivo de aquella reunión científica fue analizar el «derecho sinodal» sobre la base de las experiencias diocesanas centroeuropeas, continentales y universales. Según el título y el contenido de los trabajos, el derecho sinodal se refiere aquí a los entes que expresan la colegialidad episcopal y la corresponsabilidad de los fieles en la misión de la Iglesia. Además del caso concreto de las formas sinodales de las iglesias orientales católicas, los colaboradores de este volumen tienen en cuenta sobre todo los sínodos diocesanos, los concilios particulares, las conferencias episcopales nacionales e internacionales, los sínodos de los obispos y los concilios ecuménicos. No son objeto de una valoración específica los demás colegios establecidos en la organización eclesiástica que expresan, bien la colaboración del presbiterio con el obispo, o bien el asesoramiento en la función ordinaria de gobierno (consejo presbiteral, cabildo de canónigos, colegio de consultores, consejo económico diocesano, colegio de los cardenales, colegios de la curia romana). En alguno de los estudios hay además breves referencias a los consejos pastorales diocesanos y parroquiales.

El primero de los trabajos corresponde a *Regina Speck*, profesora de religión y colaboradora en la archidiócesis alemana de Friburgo. Trata concretamente del «Diözesanforum» celebrado en aquella archidiócesis durante los años 1991 y 1992. La autora perteneció al Secretariado del Foro, que es presentado como «ejemplo de una forma no

codicial de consulta sinodal». En efecto, el informe de Regina Speck ilustra sobre un fenómeno manifestado recientemente en las diócesis alemanas que podría denominarse «huida del derecho codicial»; es decir, la opción por formas asamblearias de reunión del pueblo diocesano con el obispo que evitan la denominación de sínodos diocesanos y no son reguladas según lo previsto en los cc. 460-468 del CIC. Según la información que ofrece la autora, la razón de esta «huida» no consiste propiamente en una mayor agilidad de los foros frente a los sínodos, sino más bien en impulsar un proceso de reflexión y debate sobre la pastoral diocesana, de manera que los foros vendrían a ser momentos especiales de ese proceso permanente de discusión. En este contexto el foro resultaría una institución más abierta e informal que el sínodo, ya que no sería concebido como institución legislativa, ni siquiera sería necesario llegar a conclusiones específicas, y tampoco habría que observar precisas determinaciones jurídicas respecto de los participantes.

Me parece, sin embargo, que los datos que aquí se presentan no alejan demasiado estas nuevas formas asamblearias del sínodo diocesano. En efecto, tanto por su duración como por los sistemas de selección de los miembros y la normativa procedimental, aquellas asambleas responden en realidad a las características de los sínodos diocesanos posteriores al Vaticano II. Ni siquiera la renuncia a la producción normativa de derecho particular puede considerarse característica específica de los nuevos foros, ya que los sínodos diocesanos recientes han optado frecuentemente por no formalizar sus conclusiones como leyes o decretos, como ha observado el

profesor Ferrari en sus diversas publicaciones sobre la materia.

Richard Puza, profesor de derecho canónico en la Universidad de Tubinga, se ocupa del «Sínodo de los obispos y las uniones de Conferencias episcopales». Se trata de un documentado análisis del tratamiento jurídico-positivo de ambas instituciones. El autor sitúa el estudio a la luz del principio teológico de la colegialidad episcopal, en el contexto de lo que algunos autores llaman «instancias intermedias», es decir, la organización eclesial interdiocesana.

A propósito del sínodo de los obispos Puza recuerda su origen, normas reguladoras, composición y funcionamiento. De particular interés son sus observaciones sobre el funcionamiento del sínodo y las perspectivas de mejora. Tales observaciones se basan en buena medida en la experiencia personal del autor, que participó en el Sínodo de 1987 sobre los laicos como ayudante del Secretario especial.

Puza estudia en las páginas dedicadas a las uniones de conferencias episcopales las relaciones de estas entidades entre sí (con referencias específicas al Consejo de Conferencias Episcopales de Europa), las organizaciones episcopales continentales (es el caso del CELAM, entidad que merece especial atención por parte del autor) y las reuniones continentales de obispos, al estilo de la celebrada en 1992 por los obispos latinoamericanos en Santo Domingo. El autor ofrece una información amplia y actualizada, con abundantes referencias prácticas, que ayuda a conocer mejor un fenómeno apenas estudiado desde la perspectiva del derecho de la organización comparada. Se plantea aquí la cuestión de si estas instituciones inter-

nacionales favorecen o no en su funcionamiento el anonimato o burocratización de la función de gobierno de los obispos, que podría llevar consigo un «centralismo pastoral» perjudicial para las Iglesias particulares representadas. Echo de menos en el estudio de Puza alguna alusión a este problema, con significativas consecuencias para el ejercicio del gobierno episcopal.

La contribución de *Carl Gerold Fürst*, profesor de derecho canónico en la Universidad alemana de Friburgo, se titula «Los Sínodos en el nuevo derecho canónico oriental». Consiste en una presentación bastante detallada de las formas sinodales primarias o fundamentales reconocidas por el CCEO: Sínodo de los Obispos de las Iglesias patriarcales y arzobispales mayores, Sínodo Permanente de tales Iglesias, Consejo de Jerarcas de las Iglesias metropolitanas *sui iuris*, Asamblea de las Iglesias patriarcales y arzobispales mayores y Asamblea de las Iglesias metropolitanas *sui iuris*.

Tanto al principio como también al final de su estudio Fürst subraya la impropiedad de un pretendido paralelismo entre el Sínodo de los Obispos de una Iglesia oriental *sui iuris* y las conferencias episcopales y concilios particulares latinos, ya que en el primer caso se trata del órgano superior de una Iglesia de propio derecho, mientras que las conferencias episcopales y los concilios particulares se inscriben, están incluidos, en las estructuras de la Iglesia latina en cuanto Iglesia de propio derecho.

Por último, *Knut Walf*, profesor de derecho canónico en la Universidad Católica de Nimega (Holanda), se plantea como título y contenido de su intervención si puede hablarse de unos pun-

tos de referencia o elementos comunes a las estructuras y derechos sinodales: «Gemeinsame Bezugspunkte für synodale Strukturen und Rechte?». Con este fin estudia los conceptos de sínodo y concilio; valora también los entes sinodales regulados por el derecho latino vigente y la experiencia de los sínodos celebrados en los años setenta en los países de habla alemana. De particular interés son las páginas dedicadas al concepto romano de colegio y su incidencia en el ámbito eclesiástico. En este sentido Walf subraya la no coincidencia estricta entre la colegialidad jurídica, entendida en el sentido clásico, y la colegialidad aplicada a la constitución de la Iglesia católica. Una prueba elocuente es para él el c. 337 § 2, que considera como colegiales las formas de actuación del cuerpo de los obispos dispersos por el mundo; es decir, sin que el colegio esté siquiera reunido al mismo tiempo y en el mismo lugar.

A partir de estas y otras consideraciones —p. ej. la subordinación de la actividad sinodal a la voluntad del papa o de los obispos, según los casos— Walf emite juicios generales sobre la estructura del gobierno en la Iglesia católica, con un tono bastante pesimista y afirmaciones a veces de gran dureza a propósito de la normativa vigente sobre las estructuras sinodales. En realidad no podría hablarse de verdaderos órganos colegiales o sinodales en la Iglesia católica, ya que, si he entendido bien la argumentación del autor, el principio sinodal sólo sería posible allí donde existiera una organización democrática del gobierno.

La lectura de esta obra colectiva sirve de estímulo para la ulterior reflexión sobre la colegialidad en el go-

bierno de la Iglesia. Están implicadas aquí muchas cuestiones prácticas y teóricas que van desde la misma terminología (¿colegios o colegialidad?, ¿colegialidad o sinodalidad?) hasta el problema de la debida armonización entre el principio jerárquico y la corresponsabilidad participativa de los fieles en la Iglesia.

ANTONIO VIANA

JOSEMARÍA SANCHIS, *La legge penale e il precetto penale*, Giuffrè editore, Milano 1993, 176 pp.

Son conocidas la escasa acogida y la falta de comprensión de que goza el derecho penal canónico en la vida y reflexión eclesiales. Ya durante los trabajos de reforma del CIC se dejaron oír voces que contestaban la posibilidad misma de existencia de un derecho coactivo en la comunidad eclesial. En el fondo de tales opiniones no es difícil descubrir un cierto desconocimiento de la naturaleza del derecho penal en la Iglesia, que está al servicio de la comunión y de los bienes fundamentales de la comunidad eclesial, protegiéndolos de los posibles atentados que pudieran sufrir.

El ejercicio del derecho penal canónico supone, ciertamente, coartar la libertad o limitar o suspender los derechos de los fieles. Por esto, en el recurso al derecho penal es muy importante una especial finura y sensibilidad jurídica, para que quede siempre a salvo la dignidad del fiel. De ahí las exigencias de legalidad que implica la imposición de una pena. El autor, claramente, defiende todas estas garantías, al apostar por la necesidad de una norma que ti-

pifique el delito y establezca la pena correspondiente. Igualmente, llama la atención sobre la amplitud de los supuestos de hecho tipificados como delitos en muchos casos y la frecuente indeterminación de las penas, lo cual lleva consigo el traspaso de gran parte de la responsabilidad a la autoridad local, para que dote de verdadera eficacia a tales normas o las adapte a las concretas circunstancias de tiempo y lugar.

Es sencillo comprobar que los estudios sobre derecho penal canónico publicados después de la promulgación del CIC de 1983 son muy pocos, ya sea por el recelo con que se le mira o por la frecuente confusión entre derecho y moral, delito y pecado, que provoca el que no se considere necesario ni conveniente el uso de los instrumentos más típicamente jurídico-penales.

Todo lo anterior hace que esta monografía revista un gran interés.

El trabajo reúne dos características no fáciles de conjuntar: un tratamiento bastante completo del tema escogido y una admirable síntesis en su exposición. El autor se mueve, además, a diversos niveles, desde un plano fundamental (capítulo primero) a otro técnico-jurídico (sobre todo, los dos últimos capítulos).

Me parece igualmente digno de ser destacado el talante con el que el autor se enfrenta a la materia estudiada. Creo que las opciones doctrinales a las que se adhiere el profesor Sanchis se manifiestan de modo claro, sin que esto le lleve a violentar el sentido o el significado de las normas en provecho de sus propias convicciones. Las normas de derecho positivo ocupan un lugar destacado y se les deja hablar con su voz propia.